

los hombres sean perfectos; y es evidente que la perfeccion es incompatible con la degradacion y el envilecimiento.

La cuarta es, que solo debe sufrir las penas el que personal y directamente sea responsable de algun delito, esto es, el que voluntariamente haya cooperado a su perpetracion, debiendo por consiguiente reputarse inéculas e irracionales las penas cuyas consecuencias directas perjudican a personas que no han cometido el delito de que se trate.

Otras muchas consecuencias se deducen de la naturaleza y objeto de las penas; pero bastan las que llevo consignadas, para justificar las prohibiciones que el art. 22 de la Constitucion impone a la autoridad judicial en lo relativo a la aplicacion de las penas.

Prohibe en términos absolutos la de mutilacion como atentatoria a la organizacion natural del hombre: la de infamia, la marca, los azotes, y los palos, como contrarias a su dignidad moral: el tormento, porque es un medio reprobado e injusto de obligar al hombre a convertirse en acusador de sí mismo, conculcando el derecho natural de propia defensa que nos impulsa a todos a reservar u ocultar nuestras faltas: la multa excesiva y la confiscacion de bienes, porque tales penas, mas que al individuo a quien se aplican, perjudican a su familia y a las personas que de él dependan.

Concluye el artículo a que me refiero, prohibiendo generalmente la aplicacion de cualquiera pena inusitada o trascendental, esto es, de toda pena cuyo uso no haya sido adoptado por los pueblos civilizados, y de todas aquellas que puedan causar perjuicio directo e innecesario al que no ha cometido el delito.

Núm. 2.—Basta lo expuesto en el número anterior para

demostrar que la pena de muerte es esencial y eminentemente injusta y bárbara porque destruye la obra de la naturaleza y porque, o sobrepasa con mucho de lo que es absolutamente preciso para que el comun de los hombres se abstenga por temor de ella, de cometer los crímenes o delitos a que se aplica, o es ineficaz para este efecto.

Los autores de nuestra Constitucion, persuadidos de esta verdad, pensaron en abolirla; pero los retrajo la consideracion de que no habia en el país cárceles seguras en que retener a los criminales, y acordaron matarlos, como una medida prudente para evitar su evasion.

La abolieron sin embargo para los delitos políticos, y declararon que solo podria imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditacion o ventaja, por los delitos graves del orden militar y por los de piratería que definiere la ley.

Núm. 3.—Los delitos políticos conforme a nuestras leyes y a la práctica de nuestros tribunales, dejan de tener este carácter exclusivo, luego que para sostener un principio cualquiera, se emplea la fuerza de las armas.

En este concepto se ha castigado y se castiga actualmente con la pena de muerte a los fautores de tumultos y asonadas y a todos los que encabezan cualquier motin a mano armada, aun cuando se tome por pretexto algun plan político.

La civilizacion de la época contribuye sin embargo poderosamente a disminuir el número de casos en que se aplica tal pena, y los tribunales, tanto civiles como militares, la aplican solamente en casos de suma gravedad; y aun en estos suele ejecutarse raras vezes, pues el Presidente de la República, en uso de la facultad que le concede

la fraccion XV del art. 85 de la Constitucion, indulta frecuentemente a los reos condenados a sufrirla.

La ley de 6 de Diciembre de 1856 y la Ordenanza militar, en su caso, son las vijentes en esta materia.

La ley de 6 de Diciembre contiene algunos preceptos incompatibles con las prevenciones constitucionales.

Conforme a los arts. 5º y 6º, es lícito en algunos casos ejecutar la pena de muerte sin mas formalidad que la identificacion de la persona.

Esto es absolutamente anticonstitucional, porque conforme al art. 20 de la Constitucion, "*en todo juicio criminal*" los acusados deben gozar de las garantías que él determina: garantías que por ser de las que aseguran la vida del hombre, no pueden ni aun suspenderse en los casos en que por el art. 29 se autoriza la suspension de las demas.

En el mismo caso se encuentran las prevenciones de los arts. 42, 43 y 44 de la citada ley, porque imponen la pena de muerte a los que amaguen con armas al jefe de la Nacion o lo hieran a él o a los ministros de Estado, diputados o ministros extranjeros.

La Constitucion solo admite esta pena en los casos de homicidio con alevosía, premeditacion o ventaja, y no debe por lo mismo aplicarse a otros.

Contra todas las disposiciones que he citado de la ley de 6 de Diciembre, procede el recurso de amparo, porque todas ellas violan las garantías que la Constitucion otorga en los artículos referidos.

Núm. 4.—La pena de muerte que la Constitucion permite que se imponga a los salteadores de caminos, se ha hecho extensiva por diversas leyes * a los plajiaros, con-

* Código penal art. 628: ley de 13 de Abril de 1869 y las posteriores en que se ha prorrogado la suspension de garantías que en ella se decreta: circular de 12 de Marzo y decreto de 3 de Junio de 1861.

siderándolos por una razon muy filosófica, comprendidos en la clasificacion de salteadores de caminos.

El precepto constitucional no puede aplicarse literalmente, porque en tal caso, los autores de un asalto que desviaran a sus víctimas del camino público, quedarian, por esta circunstancia agravante, libres de la pena que la Constitucion autoriza cuando no concurre dicha circunstancia.

Es pues necesario atender solo a su espíritu, y conforme a él, puede imponerse la pena de muerte a los salteadores que cometen este crimen bajo condiciones en que sus víctimas no pueden fácilmente implorar el auxilio de la sociedad. Tal es el caso en que se hallan los plajiaros: son verdaderos salteadores: cometen sus depredaciones con las mismas circunstancias que los de caminos, y es lógico por consiguiente, que la ley los equipare en el castigo que a unos y a otros deben imponerse.

Núm. 5.—Los delitos del orden militar se juzgan y se castigan conforme a la Ordenanza jeneral del ejército, con toda la severidad y dureza que caracterizaba a su célebre autor el rey Felipe II.

Se siente hace muchos años la necesidad de reformarla; pero esta reforma no ha tenido efecto, apesar del vivo deseo que la sociedad manifiesta de ver caer ese monumento de la bárbara crueldad de siglos que ya pasaron.

Núm. 6.—Los casos de piratería, muy raros por fortuna en la época en que vivimos, se hallan tambien comprendidos entre los que conforme a la Constitucion pueden ser castigados con pena de muerte.

Pero es necesario tener presente que la Constitucion se refiere a "los casos de piratería *que definiere la ley*." No es aplicable por lo mismo esta pena a los que no estén definidos por leyes posteriores a la Constitucion.

La antigua legislación española y las leyes mexicanas relativas a piratería, se resienten sin duda de la ignorancia, de la crueldad y de las preocupaciones de la época en que fueron expedidas, y por eso nuestros legisladores constituyentes solo autorizaron la imposición de la pena de muerte en los casos que definieran leyes mas justas y filosóficas.

Con buen fundamento y notoria justicia invocarían y obtendrían el amparo de la justicia federal los que fueran sentenciados a muerte por delitos calificados de piratería por leyes anteriores a la Constitución de 1857.

UNIVERSIDAD DE NUEVO LEÓN
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
"ALFONSO REYES"
Apto. 1025 MONTERREY, MEXICO

§ IV

LIMITACION IMPUESTA

AL PODER JUDICIAL EN LO RELATIVO A LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA AVERIGUACION DE LOS DELITOS.

Núm. 1. *Instancias que pueden tener los juicios criminales.*—

Núm. 2. *Observación.*—Núm. 3. *Prohibición de juzgar mas de una vez a una persona por el mismo delito.*—Núm. 4. *Absolución de la instancia.*

Art. 24. *Ningun juicio criminal puede tener mas de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda abolida la práctica de absolver de la instancia.*

Núm. 1.—Para la resolución definitiva de cualquier juicio, bastaría la sentencia de un solo juez que fuera infalible y perfectamente justo; pero como cualquiera de estas condiciones es imposible en la especie humana, se hace indispensable que el juicio de un hombre sea confirmado o rectificado por otros para asegurarse de que ha sido pronunciado sin error ni malicia.

Pueden estar en desacuerdo las resoluciones que dicten un juez y el revisor de sus actos; y como en este caso no habría mas razón en favor del uno que en favor del otro, es absolutamente necesario que un tercero venga a decidir quién de los dos obró con acierto.

Esto es lo mas que puede necesitarse para tener buenas probabilidades de que una sentencia es justa, y para eso la Constitución dispone que los juicios tengan, a lo mas, tres instancias.

Es verdad que se podrían tener mayores probabilidades de acierto consultando el dictamen de un cuarto o quinto tribunal, o de otros mas; pero tambien lo es que la malicia humana, abusando de estos recursos, podría causar males innumerables.

Los que están en posibilidad de cometer estos abusos, son los fuertes y poderosos contra los débiles y desvalidos. En favor de estos últimos y para que un juicio criminal abierto contra ellos no sea una calamidad interminable, la Constitución ordena que en ningun caso pueda tener mas de tres instancias.

Núm. 2.—Por justo y bueno que en sí sea este precepto constitucional, me parece que no fué meditado con toda la madurez y filosofía que corresponde a un punto en que de una plumada se decide de la fortuna, de la honra, de la libertad, de la vida, y aun de algo posterior a la muerte.

del hombre, de su memoria, del nombre de sus hijos, que será un sinónimo de perverso o de honrado, según lo decida la sentencia de un tribunal.

Mas de una vez se ha dado el terrible y funesto caso, de que despues de sentenciado y ejecutado un reo, se demuestre hasta la evidencia con pruebas irrefragables, que aquel era un inocente, y se descubra al verdadero criminal.

Para casos semejantes ¿qué garantías otorga la Constitución?

Absolutamente ninguna. La última sentencia constituye una verdad judicial, y contra ella no queda recurso de ninguna especie.

Creo por lo mismo que la Constitución ha debido garantizar los derechos del hombre, autorizando en los juicios criminales una instancia extraordinaria bajo las siguientes condiciones:

1.^a Que solo pudiera abrirse en el caso de que despues de condenado un individuo por un delito, se hubiera probado plenamente que es otro el verdadero responsable de tal delito.

2.^a Que la intentase el mismo sentenciado o cualquiera de sus deudos si él hubiera muerto.

3.^a Que el acusador indemnizase a uno ú otros de todos los daños y perjuicios que por tal motivo les hubieran resultado.

4.^a Que no habiendo acusador y no estando en posibilidad de hacer la indemnizacion, la hiciera el tesoro público del Estado cuyas autoridades le hubiesen juzgado, o de la Federación en su caso. Esto seria eminentemente justo, supuesto que para desagravio de la sociedad y en su beneficio, habria sido juzgado y sentenciado el individuo en cuestion.

Núm. 3.—Las mismas razones emitidas en el núm. 1 de este párrafo, justifican la prescripcion constitucional relativa a que nadie pueda ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Podria decirse que en el caso de que hablo en el número anterior, habria un segundo juicio; pero en realidad no es así: la instancia extraordinaria de que allí me ocupo, seria solamente una continuacion del primer juicio, y no tendria el inconveniente de poder servir de instrumento para que los poderosos oprimiesen a los desvalidos, supuesto que por su propia naturaleza solo podria tener lugar en favor de estos últimos.

Suponiendo que en realidad fuera un segundo juicio, esto solo importaria la necesidad de no consignar como absoluto el principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, estableciendo la justa y filosófica excepcion que llevo mencionada.

Núm. 4.—La práctica de absolver de la instancia consistia en resolver, despues de concluido un juicio criminal, que no habia hasta entonces, prueba suficiente para condenar al acusado; pero sin absolverlo, y dejando pendiente el juicio para continuarlo cuando se presentasen nuevos datos.

Cualquiera comprenderá que esta práctica importaba tanto como dar a los juicios criminales un número indefinido de instancias o autorizar el abuso de que el acusado fuese juzgado tantas veces cuantas quisiera el juez que habia iniciado la averiguacion.

El resultado necesario de esto era que el individuo que una vez habia sido acusado, y tal vez calumniado como responsable de un delito, no volviera a tener en toda su vida un momento de tranquilidad en el goce de sus derechos

naturales, pues cada vez que se quisiese, de buena o de mala fé, se le podia remover el juicio pendiente, extorsionarlo, causarle graves perjuicios y en seguida absolverlo nuevamente de la instancia para comenzar de nuevo cuando hubiera o se supusieran otros datos.

Semejante iniquidad no podia ser autorizada por una constitucion liberal en pleno siglo XIX.

CAPITULO V

LIMITACION COMUN A LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y POLITICAS.

§ UNICO.

Núm. 1. *Autoridades a qué se refiere el art. 16 de la Constitucion.*—Núm. 2. *Acepcion constitucional del verbo "molestar."*

Núm. 3. *Aplicacion práctica.*

Art. 16. *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora a disposicion de la autoridad inmediata.*

Núm. 1.—El precepto contenido en el art. 16 tiene por objeto evitar que se causen molestias a cualquiera persona, sin un mandamiento u orden por escrito de autoridad competente.

No dice quién sea esta autoridad; pero si se atiende a que la legislativa solo tiene facultad para dar leyes y en ningun caso para hacer efectivo su cumplimiento o aplicacion en determinados casos o personas, se comprenderá sin dificultad que las autoridades a que el artículo se refiere, solo pueden ser las políticas o administrativas y las judiciales.

Estas son pues, las únicas facultadas para expedir órdenes que justifiquen o autoricen las molestias de que habla el precepto constitucional, y por consecuencia, las disposiciones del poder legislativo, esto es, las leyes, no caen bajo el dominio de este precepto, que nunca, en ningun caso, puede servir de fundamento para interponer recurso ninguno contra ellas.

Núm. 2.—Establecido este principio, a mi juicio de grande importancia para la recta intelijencia y aplicacion del art. 16, me parece indispensable para el mismo objeto, fijar la intelijencia que los legisladores constituyentes quisieron dar al verbo *molestar*.

Choca desde luego la idea de que la ley suprema faculte a cualquiera autoridad para *molestar* a otra persona. Es muy posible y aun probable que el cumplimiento y aplicacion de las leyes pueda en ciertos casos causar molestias a determinadas personas, molestias que son en tales casos el resultado, la consecuencia indirecta de una ley; pero que nunca pueden ser el objeto principal y directo con que esta se haya expedido.

¿Qué quisieron decir pues, los legisladores constituyen-